

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital. 10
Un semestre id. id. 6
Un trimestre id. id. 4
Números sueltos. 0.25
Se publica todos los días excepto los domingos, Viernes Santo, Ascensión, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

Minas

Don Antonio Llamas Novac, Gobernador civil de esta provincia.

Hago saber: que por providencia de hoy he admitido sin perjuicio de tercero y salvo mejor derecho, una instancia de D. Manuel Gancedo y Sanchez solicitando el registro de doscientas treinta y seis pertenencias de estaño y otros metales con el nombre de «La Verdad» en Picoña, términos de Doade, Acevedo y otros, Ayuntamientos de Beariz y Avion con la designación siguiente:

Se tendrá como punto de partida un mojon que se halla a 14 metros en dirección S. 19º E. de la boca de un socavón ó galería que lleva la dirección N. E. y se halla en el paraje denominado la Picoña, del pueblo de Rubillon, distante dicha galería sobre 40 metros al N. del camino de dicho pueblo a Pontevedra. Las visuales de referencia desde el punto de partida son a la torre de la iglesia de Beariz E. 13º N. y a la cúspide de Peñacorreira S. 33º E. Desde dicho punto y en rumbo N. 8º O. se medirán 1.500 metros y se colocará la 1.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º S. se medirán 300 metros y se colocará la 2.ª estaca; desde ésta y en rumbo S. 8º E. se medirán 1.000 metros y se colocará la 3.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º S. se

medirán 100 metros para la 4.ª estaca; desde ésta y en rumbo S. 8º E. se medirán 100 metros para la 5.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º S. se medirán 100 metros para la 6.ª estaca; desde ésta y en rumbo S. 8º E. se medirán 100 metros para la 7.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º S. se medirán 200 metros para colocar la 8.ª estaca; desde ésta y en rumbo S. 8º E. se medirán 600 metros para la 9.ª estaca; desde ésta y en rumbo E. 8º N. se medirán 400 metros para la 10.ª estaca; desde ésta y en rumbo S. 8º E. se medirán 1.600 metros para la 11.ª estaca; desde ésta y en rumbo E. 8º N. se medirán 500 metros para la 12.ª estaca; desde ésta y en rumbo N. 8º O. se medirán 1.300 metros y se colocará la 13.ª estaca; desde ésta y en rumbo E. 8º N. se medirán 300 metros para la 14.ª estaca; desde ésta y en rumbo N. 8º O. se medirán 900 metros para la 15.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º N. se medirán 200 metros para la 16.ª estaca; desde ésta y en rumbo N. 8º O. se medirán 1.200 metros y se colocará la 17.ª estaca; desde ésta y en rumbo O. 8º S. se medirán 300 metros yendo a concurrir a la primera estaca y cerrando el perímetro de las doscientas treinta y seis pertenencias solicitadas.

Lo que se hace público en virtud de lo prevenido en el art. 23 de la vigente ley de Minas y más disposiciones.

Orense 31 de Mayo de 1894.

El Gobernador,
ANTONIO LLAMAS NOVACPRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador

de la provincia de Málaga y la Audiencia de dicha capital, de los cuales resulta:

Que ante el Juzgado de Alhaurin de la Torre denunció D. Diego G. Gaztambide el hecho de que en una finca de su propiedad, nombrada de la Fábrica, habían entrado cuatro hombres desconocidos, y titulándose uno de ellos Delegado auxiliar de contribuciones del Estado, sin demostrar documento alguno, procedieron a incautarse de 40 cabezas de ganado cabrio, recogiendo las del corral ya puesto el sol, y contra la voluntad del cabrero que las guardaba se las llevaron, a pesar de que dicho cabrero presentó como decisorio a un colono del denunciante con suficiente responsabilidad; que personado el denunciante en la Alcaldía y en el Juzgado municipal a informarse de si debía contribuir y a saber si se había dado auto para penetrar en su domicilio, contestaron que ninguna dieran el día en que tuvieron lugar los referidos hechos ni en algunos días anteriores; y por último, que el denunciante consideraba el referido auto como un atropello en su domicilio y en sus bienes, con el que se le han causado perjuicios, por lo cual ponía los hechos en conocimiento del Juzgado para que se castigaran criminalmente, abonándole los perjuicios que se le habían irrogado.

Que al ratificarse D. Diego G. Gaztambide en su denuncia ante el Juzgado de instrucción de Málaga, denunció también que el embargo se había verificado faltando a varias disposiciones de la instrucción vigente en la materia, ya por no haberse hecho la notificación en legal forma, ya por no reunir los testigos de aquella diligencia los requisitos debidos, ya por haberse verificado el embargo bastante tiempo después de puesto el sol, ya por no haberse notificado al interesado dicho embargo, no haberle citado de remate y, por último, haber vendido el ganado, sin dar conocimiento al denunciante.

Que instruida la correspondiente causa, aparecen, entre otras diligencias, copia de expediente contra D. Diego G. Gaztambide por débito de contribución territorial, correspondientes a los dos últimos trimestres de 1888-89; un acta de cortejo de la referida copia unida a los autos con el expediente original que obraba en las oficinas de la Delegación de Hacienda, y el mismo expediente original, y un oficio de la

Administración de Contribuciones de Málaga, dirigido a D. Diego G. Gaztambide, participándole que el Delegado de Hacienda había anulado el procedimiento ejecutivo seguido contra el referido Gaztambide en Alhaurin de la Torre por débito de contribuciones, poniéndolo en su conocimiento a fin de que pudiera acudir a los Tribunales ordinarios en reclamación de los daños y perjuicios que hubiere podido sufrir por dicho procedimiento, si así creyera conveniente a sus intereses.

Que declarados procesados los que habían formado el expediente de apremio é intervenido en las diligencias del mismo, y una vez terminado el sumario en el cual se había mostrado parte civil Don Diego G. Gaztambide, el Ministerio fiscal presentó como conclusiones que el día 13 de Diciembre de 1889, en la finca llamada de la Fábrica, propiedad de D. Diego G. Gaztambide, término de Alhaurin de la Torre, los procesados, algunos de los que están en rebeldía, habían embargado, sin las formalidades necesarias, 40 cabezas de ganado cabrio, y llevándose las al pueblo, las vendieron en subasta, percibiendo 200 pesetas del comprador, formando y autorizando el expediente D. Eduardo Velasco, Auxiliar del Agente ejecutivo D. Juan Cadenas, que esos hechos constituyen los delitos de falsedad y estafa comprendidos en los artículos 314, núm. 2.º, y 548, núm. 1.º, del Código penal, siendo aquél medio para perpetrar éste; que de uno y otro delito es autor D. Eduardo Velasco, y cómplices D. Fernando de Castro y Roque de Bruna, además de los rebeldes, y solicitó para los reos las penas que creyó procedentes.

Que a nombre de D. Diego G. Gaztambide se presentó escrito de conclusiones respecto a la responsabilidad civil de D. Juan Cadenas, como Agente ejecutivo para el cobro de contribuciones, de quien eran Auxiliares D. Eduardo Velasco, D. Fernando Castro y Roque de Bruna.

Que presentado el escrito de conclusiones por los procesados y por don Juan Cadenas, el Gobernador civil de la provincia de Málaga, a instancias de la Delegación de Hacienda, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición a la Audiencia de dicha capital alegando que el expediente de apremio seguido contra D. Diego G. Gaztambide en el cual se entabló por éste reclama-

ción ante la Delegación de Hacienda solicitando la nulidad del apremio, se halla resuelto en primera instancia, pero se hallaba pendiente de sustanciación en la alzada interpuesta, por los procedimientos contra contribuyentes por sus descubiertos á favor de la Hacienda, son puramente administrativos, y su conocimiento y resolución corresponden exclusivamente á la Administración, sin que los Tribunales ordinarios puedan admitir demanda alguna, á menos que se pruebe haberse agotado la vía gubernativa; que mientras no se resuelva la apelación y se reserve á los Tribunales el conocimiento de los hechos que puedan resultar con carácter punible, no deben ni pueden conocer del asunto; que existe una cuestión previa que resolver; consiste en indagar si la Agencia ejecutiva obró ó no de acuerdo con la instrucción vigente en la materia, trámite que ha de influir necesariamente en el fallo que en su día dicten los Tribunales; el Gobernador citaba los artículos 1.º y 80 de la instrucción de 12 de Mayo de 1888 y el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que tramitado el incidente, durante cuya sustanciación acreditó haber fallecido el procesado D. Eduardo Velasco Zaragoza, la Audiencia de Málaga dictó auto sosteniendo su jurisdicción, fundándose en que si bien los procedimientos contra contribuyentes son puramente administrativos, y en general no pueden entender los Tribunales ordinarios de los recursos que contra los mismos se utilizan hasta que la Administración resuelva y declare si el proceder de su agentes se ajustó ó no á las reglas de la Instrucción de 12 de Mayo de 1888, esa doctrina es sólo aplicable cuando el hecho justiciable de que se trate sea ó pueda ser consecuencia de la infracción de las disposiciones administrativas, y no cuando el hecho que se califica como delito es independiente de las reglas administrativas; como sucede en el caso presente, porque entonces no hay razón ni fundamento para la competencia excepcional y privilegiada de la Administración en la materia; en que no implica razón de competencia el hallarse pendiente el recurso de alzada ante la Administración, puesto que, dada la separación que el delito calificado tiene con la tramitación de dicho expediente la esfera de acción de competencia de los Tribunales es distinta de esfera en que se mueve la Administración; en que calificado el hecho de delito de falsedad, como medio de preparar otro, y no pudiendo ser incidencia de procedimiento ejecutivo de apremio, sino delito independiente y separado de los trámites del expediente administrativo, no puede decirse que exista cuestión previa que resolver, puesto que cualquiera que sea la resolución administrativa, los hechos constitutivos de delito conservarán siempre su carácter y naturaleza punible; en que no puede influir ni tiene eficacia para la cuestión de competencia cualquier omisión en que, al relatar los hechos, haya incurrido la calificación fiscal, bastando que estos hechos se desprendan de las actuaciones sumariales, tanto más cuanto que el delito se halla claro y determinadamente calificado; y por último en que no hay, por lo que se refiere al delito de falsedad, cuestión alguna previa que resolver por la Administración, y no estando reservado por la ley el castigo del delito á los funcionarios de la misma, y si á los Tribunales ordinarios, no se está en ninguno de los dos casos en que por el Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 pueden suscitarse competencias en los juicios criminales. La Audiencia citaba los artículos 16, 17 y 19 del referido Real decreto y los artículos 10, 141,

239 y 240 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual derenda el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que los hechos objeto de la causa han sido calificados como constitutivos de delitos de estafa y de falsedad.

2.º Que en cuanto al primero ó sea el de estafa, existe una cuestión previa que la Administración debe resolver, y que consista en decir si el denunciante adeudado ó no alguna contribución y, por tanto si había ó no derecho en el Agente ejecutivo para reclamarle la cantidad cuya exacción fué objeto de la denuncia.

3.º Que respecto al delito de falsedad no hay cuestión previa administrativa, debiendo los Tribunales proceder desde luego á la averiguación, y en su caso al castigo del referido hecho.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el de Ministros:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino.

Vengo en decidir esta competencia en favor de la Autoridad judicial respecto al delito de falsedad, y en favor de la Administración en cuanto á los demás hechos objeto del proceso.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro. — María Cristina. — El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 136.)

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el expediente instruido sobre concesión de concierto para el pago del impuesto especial sobre el alcohol de melazas á los fabricantes de azúcar de caña de Almería, Granada y Málaga, dicho alto Cuerpo lo ha evacuado en los términos siguientes:

«Excmo. Sr.: La Sección, cumpliendo lo dispuesto en Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., ha examinado el expediente promovido por varios fabricantes de azúcar de caña de las provincias de Málaga, Granada y Almería, proponiendo la celebración de un concierto general para el pago del impuesto especial establecido sobre los alcoholes por los que obtengan de las melazas, residuos de todas las fábricas de aquella clase en las tres provincias. Como bases para este concierto, expresan que podría realizarse por tres años naturales, ó sea desde 1.º de Enero último al 31 de Diciembre de 1896, en que espira el celebrado con los propios fabricantes por su producción azucarera; que no se comprenden en el vino el alcohol elaborado exclusivamente con las melazas ó residuos de la primera materia de la fabricación que en la actualidad existan ó resul-

ten en las campañas sucesivas dentro del referido período y desde luego por la cantidad que se estipule. Que estos residuos habrán de elaborarse en las destilerías anejas á las fábricas mencionadas que tengan estos aparatos, los cuales no podrán destilar otras melazas que las procedentes de las fábricas concertadas; que este concierto será común á todos los fabricantes de azúcar de caña, quienes lo suscribirán proporcionalmente, pero quedando todos realmente obligados con la Hacienda respecto al pago de su importe, y si alguno por excepción se negase á suscribirlo, el grupo de las concertadas se subrogase en los derechos de la Hacienda para intervenir al no concertado y devengar el impuesto correspondiente, y que verificado este concierto quedará libre de intervención y trabas la producción de este alcohol, aunque sometido á las reglas establecidas para su circulación en el Reino.

La Dirección general de Impuestos propuso á V. E. que se accediera á lo solicitado, dándose á esta resolución carácter de general; más la de lo Contencioso, aunque en principio se muestra conforme con aquel Centro, entiende, sin embargo, que deberían establecerse previamente determinadas bases para celebrar dicho concierto, que deberán ser:

1.º Constituirse en gremios los fabricantes que lo pretendan, y que éste autorice á alguno de ellos para tratar con la Hacienda.

2.º Que el gremio se entenderá constituido cuando así lo acuerden en escritura pública la mitad más uno de los productores de la provincia ó población á que el concierto se refiera.

3.º Que la cantidad mínima para que éste se celebre no podrá bajar de 37'50 pesetas por hectólitro de la producción que sirva de base para realizar el concierto, con la bonificación del 5 por 100 establecida por el art. 77 del reglamento del ramo.

4.º Que los agremiados solo quedarán sujetos al cumplimiento de las condiciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 5.ª del artículo 74, y la 1.ª 2.ª y 7.ª del 75 del propio reglamento.

5.º Que la Administración percibirá directamente el impuesto de fabricación que corresponde á los no agremiados, los cuales quedarán sujetos á la fiscalización y vigilancia establecidas.

6.º Que el importe anual del concierto se hará efectivo por mensualidades anticipadas.

7.º Que habrá lugar á la rescisión del concierto por las causas establecidas en el art. 84 del reglamento, ya sean imputables á uno ó varios de los agremiados.

8.º Que las responsabilidades serán solidarias entre los agremiados, y la Hacienda podrá hacer efectivo el cupo total del concierto, ya contra el Sindicato ó contra uno ó más de los que formen el gremio.

Y 9.º Que una vez aprobado el concierto, ha de elevarse á escritura pública, cuyos gastos y primera copia, que ha de facilitarse á la Hacienda, será de cuenta del gremio, remitiendo V. E. en tal estado el expediente á informe de esta Sección.

No ofrece duda alguna que el concierto pretendido por los fabricantes de azúcar de caña, en la instancia de que queda hecha referencia, está autorizado por el art. 46 de la ley vigente de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, al establecerse en él que el impuesto sobre los alcoholes producto de las mieles y melazas, residuo de la fabricación de azúcar, será recaudado directamente ó por concierto sobre la producción peninsular. Lo que hay es que el reglamento provisional de 29

del mismo mes, dictado para la ejecución de aquel artículo de la ley de Presupuestos, al desarrollar en su cap. 5.º la parte del precepto legal referente á la recaudación del impuesto, no ha tenido en cuenta la posibilidad de que ésta pueda verificarse por conciertos generales con los productores ó fabricantes á que se refiere la ley, de donde resulta que los ha establecido y reglamentado solamente sobre el cómputo de elaboración de cada fábrica y atendiendo á la importancia de los aparatos, días y períodos de funcionamiento, y exigiendo por tanto, que se cumplan reglas y requisitos insostenibles tratándose de conciertos de la índole del propuesto en este expediente. Ahora bien; como los términos de la autorización que contiene la ley son claros y precisos y la forma de recaudación por concierto general con los productores es, en principio, indudablemente beneficioso para los intereses de la Hacienda, puesto que asegura perfectamente la cobranza del impuesto evitando gastos y dilaciones, y al mismo tiempo se favorece con ella á los contribuyentes, librando de trabas la producción, hay que reconocer la conveniencia de ampliar los preceptos del reglamento aludido, de suerte que puedan realizarse esta clase de conciertos. Y como esta conveniencia la reconocen también los centros directivos informantes, no cree necesario la Sección insistir ni extender con este motivo sus razonamientos.

En cuanto á las bases que convenga dictar con el fin de subsanar la omisión ó deficiencia notada en el reglamento, sin desconocer que todas las propuestas por la Dirección de lo Contencioso están inspiradas en el propósito de asegurar y garantizar los derechos de la Hacienda, cree, sin embargo, la Sección que algunas de ellas son innecesarias, y más que facilitar imposibilitan ó dificultan la realización de tales convenios.

Entre éstas debe considerarse el exigir la previa constitución mediante escritura pública en gremio para concertarse.

Semejante formalidad á nada conduce desde el momento en que, siendo, como es, perfectamente conocido el número de productores ó fabricantes que pueden solicitar dicho concierto, todos estén conformes en realizarlo, y lo autoricen por sí ó por los medios legales, porque en derecho se tramite la personalidad, no se necesitó ciertamente tal requisito para convenir respecto del impuesto sobre la producción azucarera con los que promueven este expediente, ni precisa exigirlo tampoco en este caso, pues bastará á este propósito con establecer que para la celebración de esta clase de conciertos será necesario que entren en él las dos terceras partes por lo menos de los productores ó fabricantes, y ésta se subrogue en los derechos de la Hacienda con respecto á los demás no concertados, obligándose en cambio á pagar directamente el impuesto que por los residuos de fabricación corresponda á los últimos, tampoco conduce á nada práctico el exigir á los concertados á que nos venimos refiriendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 74 y 75 del reglamento de que se trata, pues si han de cumplirlos en todas ó en parte, ninguna ventaja les reportaría el concierto, y con su cumplimiento posterior tampoco gana nada la Hacienda; bastará con que se establezca que no podrán destilar más que mieles y melazas procedentes de la fabricación concertada; y es, por último, innecesario exigir que estos conciertos se hagan constar en escritura pública, la forma usual adoptada para los de índole análoga; basta, sin

que por ello deje de tener éstos, como la tienen aquéllos, toda la fuerza y eficacia que de los mismos se deriva.

Así pues, autorizando el art. 46 de la ley vigente de Presupuestos la celebración de conciertos para la recaudación del impuesto sobre los alcoholes producto de las mieles y melazas, residuos de la fabricación de azúcar peninsular, y justificada la conveniencia de que estos sean generales, fuerza es dictar una medida que, ampliando el reglamento, los estatuya y reconozca cuya disposición deberá establecerse solamente aquellas reglas esenciales para garantía de la Hacienda, dejando a un lado las que son peculiares y propias de todo convenio con la Administración.

Estas deberán ser:

1.º Sólo podrán celebrar conciertos generales para el pago del impuesto especial sobre los alcoholes, establecido por el art. 46 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, los fabricantes de azúcar de la Península por la destilación de sus residuos de fabricación.

2.º Para ello será necesario que presten su conformidad las dos terceras partes por lo menos de los fabricantes de azúcar de caña ó remolacha y éstos se obliguen á pagar la parte del impuesto que corresponda á los no concertados, subrogándose para este solo efecto en los derechos de la Hacienda.

3.º Sin perjuicio de que la Administración perciba directamente el impuesto correspondiente á la parte de fabricación no concertada, estos fabricantes quedarán sujetos á la intervención, vigilancia y fiscalización establecidos por el reglamento. En esta intervención y fiscalización podrán ser subrogados los concertados previa estipulación.

4.º La cantidad mínima del concierto será la suma que corresponda á la producción que sirva de base para el mismo, á razón de 37'50 pesetas por hectolitro, con la bonificación del 5 por 100 que establece el art. 77 del reglamento.

5.º Que se obligan á no destilar otras mieles y melazas que las procedentes de la fabricación concertada.

6.º Que las responsabilidades de los concertados para con la Hacienda son solidarias, y ésta podrá hacer efectivo el todo ó parte del cupo del concierto contra todos y cada uno de los concertados.

7.º Que habrá lugar á la rescisión del concierto cuando llegue á conocimiento de la Administración que algunos de los comprendidos en él faltan á las condiciones establecidas ó dejen de satisfacerse en los plazos señalados las cuotas que se estipulen, esto sin perjuicio de utilizar los procedimientos administrativos para el cobre.

8.º Para todos los incidentes que se susciten con motivo y para la ejecución del concierto, la Administración se entenderá directamente con la representación que designen los mismos concertados.

9.º El Ministro se reservará la facultad de disponer en todo tiempo la inspección necesaria de la fabricación concertada, tanto para cerciorarse de que se cumplen las condiciones del concierto como para recoger los datos estadísticos de la producción y desarrollo de la industria, que estarán obligados á suministrar los fabricantes.

V. E., no obstante, con S. M. acordará lo más acertado.

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con el preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios

guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1894.—Salvador.—Sr. Director general de Contribuciones é Impuestos.

(G. núm. 91.)

Ilmo. Sr. Visto el expediente instruido en esa Dirección general á consecuencia de la consulta formulada por el Ingeniero Jefe del distrito minero de Zaragoza, transmitida en Real orden comunicada por el Ministro de Fomento con fecha 5 del pasado mes, en cuya consulta pide se determine si á los remanentes de minas adquiridas en subasta pública, como consecuencia de caducidades decretadas por falta de pago del canon por superficie ha de exigírseles el pago de los derechos al Estado por el número de pertenencias de que conste la mina y el valor del sello que se exige á los títulos que se conceden á los Registradores, y si el título que al adquirente ha de expedirse, con arreglo á los artículos 18 de la Instrucción de 9 de Abril de 1889 y 8.º de la de 1.º de Agosto del mismo año, ha de remitirse á la Dirección general de Agricultura para la estampación del sello correspondiente.

Considerando que los derechos que por el número de pertenencias de que consta una mina, establecidos por el art. 56 del reglamento de 24 de Junio de 1868, reformado por la orden del Poder Ejecutivo de 13 de Junio de 1875, sólo pueden exigirse al depunador de una mina, pero no al que la adquiere en subasta, como no se exigen al que la adquiere por un contrato de compraventa:

Considerando que al adquirente de una mina caducada por descubiertos de canon y enajenada en subasta no se le otorga escritura, y el único documento de propiedad de que se le provee es un título análogo al que se expide al concesionario, cuyo documento debe revestir los mismos caracteres que el anulado al caducar la concesión;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa Dirección general, se ha servido resolver que los adquirentes de minas caducadas por descubiertos de canon por superficie y subastadas con arreglo á lo dispuesto en el art. 23 del decreto ley de 29 de Diciembre de 1868 y art. 13 y siguiente de la Instrucción de 9 de Abril de 1889, sólo están obligados á satisfacer los derechos reales por transmisión de bienes que las leyes determinen y á entregar dentro del plazo determinado en el art. 56 de reglamento de 24 de Junio de 1868 reformado por la orden del Poder Ejecutivo de 13 de Junio de 1874, el papel de reintegro correspondiente al valor del sello en que haya de extenderse el título de propiedad, al que se dará igual tramitación que se da á los títulos de nuevas concesiones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y consiguientes efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1894.—Salvador.—Sr. Director general de Contribuciones é Impuestos.

(G. núm. 114.)

Ilmo. Sr. Vistas las consultas formuladas por el Inspector de Hacienda don Juan Blas Sitges y por el Administrador de la Aduana de Algeciras acerca de si estando habilitada esta oficina como de primera clase por Real orden de 23 de Noviembre de 1893, pueden despacharse en ella tejidos, alcoholes y tabacos:

Resultando que el carácter de generalidad que para toda clase de comercios conceden las Ordenanzas de

Aduanas á las de primera clase no es absoluto, pues está prohibido que los tejidos y los tabacos se despachen en algunas de dichas oficinas, impidiendo las prevenciones del reglamento para la aplicación de la ley de Alcoholes que en otras de aquellas se verifique el despacho de líquidos espirituosos:

Resultando que, por tanto, y á pesar de que la Real orden de 23 de Noviembre último determina de un modo preciso que la nueva habilitación de la Aduana de Algeciras debe entenderse concedida desde aquella fecha para todos los efectos de la legislación y operaciones que en dicha oficina se verifiquen, no se han autorizado aun las importaciones de las referidas mercancías por la dependencia de que se trata:

Considerando que para que desaparezcan las dudas antes mencionadas es preciso señalar de un modo expreso y terminante cuáles son las mercancías que pueden importarse por la Aduana de referencia:

Considerando que ninguna dificultad existe para autorizar por tal Aduana la importación de tejidos, autorización que será sin duda alguna beneficiosa para los intereses del Tesoro, pues abriendo á los introductores de dichas mercancías el camino legal, les hará separarse del fraudulento:

Considerando que el reglamento de Alcoholes limita á muy contadas Aduanas, que de un modo expreso determina la facultad de poder despachar en ellas dicha mercancía, y que si bien por ser tal reglamento de fecha anterior á la Real orden señalando la nueva habilitación de la de Algeciras, no pudo prever esta reforma, no hay motivos que justifiquen una ampliación de aquel reglamento en el sentido de autorizar la importación de alcoholes por la Aduana de Algeciras:

Y considerando que el arriendo de la renta de tabacos á una Sociedad particular obliga á obrar con gran prudencia en todos los asuntos que afectan á los intereses de la misma, y que aunque en el punto concreto de las habilitaciones de las Aduanas el Gobierno de S. M. se reserva el derecho de una absoluta libertad de acción, no parece oportuno prescindir de la opinión de la Compañía arrendataria, cuando, como ocurre en el presente caso, no existen motivos de urgencia que justifiquen lo contrario;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido declarar que á Aduana de Algeciras se halla autorizada para la importación de toda clase de mercancías excepto el tabaco y los alcoholes.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1894.—Salvador.—Sr. Director general de Aduanas.

(G. núm. 149.)

Ilmo. Sr. Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Rufino de la Incera solicitando, en nombre y representación de D. José Mac Leman y White, que se habilite el muelle de hierro construido por este último en el Astillero, y los de San Salvador y Solia, todos ellos situados en la bahía de Santander, para el embarque de mineral de hierro y para el desembarque y despacho de maquinaria y aparatos para la explotación de las minas, que el solicitante posee en Obregon, del material fijo y móvil destinado á la línea férrea que se construye desde dichas minas á la ría del Astillero, y de los carbones minerales, cementos, cal y maderas destinadas á la referida construcción, ya procedan dichas mercancías

del extranjero, ya se conduzcan por cabotaje:

Considerando que el acceder á la habilitación que pide el recurrente para tres distintos puntos de la bahía de Santander ha de redundar en beneficio de la industria minera que tanto incremento ha tomado en aquella zona:

Considerando, por otra parte, que no se trata de introducir ninguna innovación que pueda aparecer peligrosa para los intereses de la Hacienda, puesto que los puntos del Astillero y San Salvador están habilitados desde hace bastantes años para realizar en ellos ciertas operaciones mercantiles, siendo objeto, tanto estos puntos como el de Solia, de una vigilancia constante por parte de las fuerzas del Resguardo:

Considerando que los informes emitidos por las Autoridades provinciales respecto á la habilitación de que se trata coinciden en la conveniencia de acceder á lo solicitado, consignando que con ello se facilitará el desarrollo de la riqueza pública; y

Considerando que en este caso pueden armonizarse perfectamente los intereses industriales de que se trata con los del Tesoro;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido disponer se acceda á lo solicitado en la instancia de referencia, previo el cumplimiento de las condiciones siguientes:

1.ª El embarque de mineral de hierro por los muelles del Astillero, San Salvador y Solia, se hará con documentación de la Aduana de Santander y será intervenido por el empleado pericial que designe el Administrador de dicha Aduana, vigilándose la operación en el Astillero por el Resguardo de Veteranos, y en los puntos de San Salvador y Solia por los carabineros del Reino que en ellos prestan servicio.

2.ª Que los efectos mencionados en la instancia y que han de descargarse y despacharse en los referidos muelles, vengán consignados de un modo expreso al recurrente, tanto en el comercio de importación como en el de cabotaje; siendo preciso que los buques conductores se detengan en Santander para recibir la oportuna autorización antes de internarse en la bahía, y que no conduzcan otras mercancías distintas de las que deban despacharse en los puntos que se habilitan, y en caso de conducir las, que se trasborden en Santander las que se destinen á dichos puntos para transportarlas hasta ellos en embarcaciones menores, que deberán ir custodiadas por individuos del Resguardo, los cuales ejercerán la más eficaz vigilancia con arreglo á las órdenes que reciban del Administrador de la Aduana de Santander.

3.ª Que los despachos de las mercancías á que se refiere la condición precedente se hagan por los empleados que en cada caso designe el citado Administrador.

4.ª Que los derechos que con cargo á las repetidas mercancías deba percibir la Hacienda se hagan efectivos en Santander dentro de los plazos establecidos por la legislación.

Y 5.ª Que con arreglo á lo prevenido en el Apéndice 1.º de las Ordenanzas de la Renta, los recurrentes abonem á los empleados que practiquen los despachos las dietas correspondientes y faciliten los locales y aparatos necesarios para efectuar los despachos.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1894.—Salvador.—Sr. Director general de Aduanas.

(G. núm. 133.)

ANUNCIOS OFICIALES

JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PUBLICA DE ORENSE

Circular

El Ilmo. Sr. Rector de Santiago, se ha servido nombrar con fecha 25 de Mayo último, en virtud de concurso, maestra en propiedad de la escuela completa de niñas del Ayuntamiento de Junquera de Ambia, á doña Concepcion Casar Gonzalez; de la de igual clase del de Pungin, á doña Florencia Amparo Cabo; de la incompleta mixta de Garabanes, en Maside, á doña Manuela Rodriguez y Rodriguez, y de la de temporada de Santa Eulalia, en Petin, á doña Ramona Albitos Peña.

Lo que se hace público para conocimiento de las interesadas, quienes pueden presentarse en la Secretaría de esta Corporacion á recoger los correos, pendientes títulos administrativos con el fin de tomar posesion de los cargos para que fueron nombradas, advirtiéndoles que dichos títulos deben reintegrarse con una póliza de dos pesetas en el acto de serles entregados.

Orense Junio 1.º de 1894.—El Gobernador Presidente, Antonio Llamas Novac.—José Villamarin, Secretario

INSPECCION DE 1.ª ENSEÑANZA DE ESTA PROVINCIA

Con el fin de poder despachar en tiempo oportuno los presupuestos para el año económico venidero de 1894-95, esta Inspeccion ordena á todos los señores Maestros y Maestras de la provincia, que entreguen los referidos presupuestos dentro del presente mes al Profesor de la completa de cada Ayuntamiento, y éste se encargue á su vez que con el informe de la Junta local sean remitidos á la ilustre Junta provincial.

Además del presupuesto por duplicado deberán acompañar un inventario detallado de todos los enseres y útiles de enseñanza que existen en la Escuela; y sería conveniente que figurasen tambien en ellos una nota numérica de los niños asistentes á la Escuela menores de 6 años y de 6 á 9.

Orense 1.º de Junio de 1894.—El Inspector, Luis Jorge de Pando.

DELEGACION DE HACIENDA

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Minas

Habiendo resultado ineficaces las diferentes gestiones practicadas para notificar personalmente á los propietarios de las minas que á continuacion se detallan por el descubrimiento de más de cuatro trimestres, que contra cada uno de ellos resulta por el impuesto de cánon de superficie, se les requiere por medio de este anuncio al pago de las cantidades que adeudan, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 del decreto ley de 29 de Diciembre de 1868, la Real orden de 21 de Agosto de 1883, circular de 17 de Septiembre de 1887 y 20 de Julio de 1888 y demás disposiciones vigentes, citándolos y emplazándolos para que en el término de 15 días, á contar desde la insercion de este aviso, se presenten á solventar sus descubiertos; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho

plazo sin hacerlos efectivos se reclamará del Sr. Gobernador civil la caducidad de las expresadas minas, y les seguirá el perjuicio y responsabilidad á que dieron lugar.

Número del registro	Nombres de las minas	Término en que radican	Clase de mineral	Nombre del propietario	Vecindad	Importe del canon Pesetas
37	H. San Manuel	Gomesende	Estano	Marqués de Bogaraya Cervantes	Madrid	78
46	Constancia	Fredes de Eiras	idem	idem	idem	1.599
47	Recompensa	idem	idem	idem	idem	975
48	Galleitos	Gomesende	idem	idem	idem	312
49	Fortuna	idem	idem	idem	idem	292.50
50	Mi socio	Fredes de Eiras	idem	idem	idem	234
63	San Luis	idem	idem	idem	idem	234
78	Chasco segundo	Boborás	idem	D. Rosendo Viejo	Avion	70.20
135	Nuestra Señora del Carmen	Avion	idem	idem	idem	304.20
136	Isaac Petal	idem	idem	idem	idem	93.60
137	Socorro	idem	idem	idem	idem	124.80
159	Margarita	Beiriz	Estano	El mismo	Madrid	507
				Marquesa Villalegre		4.824.30
				Total		4.824.30

Orense 25 de Mayo de 1894.—M. Mantecon.

AYUNTAMIENTOS

MEZQUITA

Se halla vacante la Secretaria de este Ayuntamiento dotada con el sueldo de 875 pesetas anuales. Los aspirantes á dicho destino presentarán sus solicitudes en esta Alcaldia, dentro del plazo de quince días, primeros despues que aparezca este anuncio en el Boletín oficial.

Mezquita 23 de Mayo de 1894.—El Alcalde, José Rodriguez.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

Don Gumersindo Bujan y Bujan, Juez de primera instancia de la villa y partido de Celanova.

Hago notorio: que para hacer pago de doscientas sesenta y tres pesetas importe de los honorarios y derechos devengados por el Dr. D. Venancio Moreno y Procurador D. Enrique Berjano, en causa criminal seguida contra

Rosa Estevez Rodriguez, de Fondones, Alcaldia de Quintela de Leirado, por hurto, se le embargaron, tasaron y anuncian de nuevo en venta sin sujecion á tipo las fincas siguientes:

Pesetas

Al término denominado da Fraga, un terreno arenoso destinado á producir maíz; linda por Este terreno de Manuel Alonso. Sur con el de Inocencio Estevez, Oeste y Norte viñedo de Ramon Vazquez; su superficie seis áreas y 72 centiáreas: su valor 321 pesetas

321

Al término das Gesteiras, otro terreno labradío regadio; demarca por Este con huerta de Manuel Codias, Sur y Norte heredad de Manuel Vazquez y Oeste la de Francisco Rodriguez; su superficie cinco áreas y 77 centiáreas: su valor 283 pesetas y media

283'50

Al término de la Pereirifa, una heredad labradía regadia con un pozo ó depósito de agua para fertilizar ésta y más terrenos con el surtidor que viene del término dos Liñares; linda por Este con camino servicio de particulares, Sur heredad de Valerio Vazquez, Norte la de Ramon Vazquez y Oeste otra de los señores de la Piedra; su superficie seis áreas 51 centiáreas: su valor 465 pesetas

465

Total 1069'50

Cuyos bienes radican en términos de Fondones, parroquia de Santa Maria de Leirado, alcaldia de Quintela, y se anuncian en venta sin sujecion los títulos de propiedad.

Cualquiera persona que á dichos bienes quiera hacer postura, se presentará en la sala de audiencia de este Juzgado sito en la calle del Gobernador de esta poblacion el día trece del entrante Julio y hora de diez de su mañana, donde tendrá efecto el remate de los mismos en favor del más ventajoso postor.

Dado en Celanova á treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro — Gumersindo Bujan.—D. S. M., José Prieto.

Don Luis Madriñan Megid, Juez municipal suplente de esta ciudad funcionando como de instruccion en la misma y su partido.

Hago saber: que en sumario de causa criminal pendiente en este Juzgado y Escribania del que autoriza, contra José Ponton Lopez, vecino del pueblo de Mourelle, parroquia de Filgueiras, Ayuntamiento del Incio, partido de Sarria por estafa de 71.000 pesetas á don Manuel Pereiro Rey, vecino de esta ciudad, acordé llamar por edictos á Manuel Nuñez, vecino del pueblo y parroquia de Santa Cruz del Incio, Ayuntamiento del Incio, en dicho partido de Sarria, á fin de que dentro del término de diez días, á contar desde el siguiente al de la publicacion del presente en la Gaceta de Madrid, comparezca en este Juzgado sito en la calle de Alba núm. 21, para declarar en dicho sumario, apercibido que de no comparecer se parará el perjuicio á que en derecho haya lugar.

Dado en Orense á veintiocho de Mayo de 1894.—Luis Madriñan Megid.—El actuario, Pedro Cardero.

ANUNCIOS

SALON DE VESTIR

SERAFIN FEIJOO

Plaza Mayor, 16.—Orense.

En este acreditado establecimiento hay un magnífico surtido en géneros propios de la estacion.

Trajes hechos de lanas y de otros géneros para hombre desde 17 á 65 pesetas, uno; y se hacen á la medida á gusto del parroquiano con prontitud y esmero y sin necesidad de probarlos.

Hay capas de buenos géneros y bien hechas.

Hay galones de cabos y sargentos, cordones, hombreras, cintas, botones y otros géneros para guardia civil.

La más alta recompensa concedida en la Exposición Universal de Chicago!!

LA COMPANIA FABRIL «SINGER»

HA OBTENIDO 54 PRIMEROS PREMIOS

Siendo el número mayor de premios alcanzados entre todos los expositores.

Y MAS DEL DOBLE de los obtenidos por todos los demás fabricantes de máquinas para coser, reunidos

CATALOGOS ILUSTRADOS

GRATIS

Sucursal en Orense: 36, PROGRESO, 36

CATALOGOS ILUSTRADOS

GRATIS

A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS



Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista don M. Marbán, el cual tiene su gabinete Clínico Oftalmológico en la calle de Hernán Cortés núm. 7.

Horas de consulta y operaciones, de 9 á 12 de la mañana y de 3 á 5 tarde. Coloca y vende ojos artificiales.

NOTA.—En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio.

Contra el MILDEW

En los almacenes de azufre de don Francisco de las Cuevas se ha recibido directamente de Riorinto una considerable partida de sulfato de cobre de calidad superior.

ABONARÉS DE CUBA

Los compra D. Demetrio Rodriguez SAN FERNANDO, 21.—ORENSE

Imprenta LA POPULAR